

tuir un estudio de conjunto de las características contemporáneas y efectivo funcionamiento de la jurisdicción palatina en los Patronatos reales, sino también de haberse apoyado en una amplia documentación archivística hasta ahora inédita, especialmente del Archivo General de Palacio de Madrid.

Aunque se trata de una investigación realizada con método histórico, y no de un libro jurídico, se agradecen las muchas anotaciones de la autora que ayudan a comprender las características canónicas de la jurisdicción palatina en la edad contemporánea. El libro no dejará de interesar a los canonistas, tanto por el tema estudiado, que presenta muchos reflejos de la doctrina histórica sobre los principios canónicos de territorialidad y personalidad, como también por la atención que la autora ha sabido prestar a los aspectos jurídicos de los hechos e instituciones que ha estudiado.

ANTONIO VIANA

**González Ayesta, Juan**, *La naturaleza jurídica de las «facultades habituales» en la codificación de 1917*, EUNSA (Colección Canónica), Pamplona 2000, 185 pp.

El § 1 del vigente c. 132 dispone que «las facultades habituales se rigen por las normas sobre la potestad delegada», encuadrando así la principal referencia normativa acerca de esas facultades en el régimen jurídico de la potestad eclesiástica de gobierno.

Por su parte, el viejo c. 66 § 1, al acoger la ya entonces antigua praxis del otorgamiento de *indultos* y facultades estables —especialmente a los obispos y otros ordinarios— para conceder deter-

minadas gracias, integraba esa figura en el conjunto del derecho común codificado mediante su asimilación jurídica al privilegio *praeter ius*. De este modo, el contexto normativo de la figura se situaba en el ámbito de la atribución graciosa de situaciones favorables orientadas a ampliar el patrimonio jurídico del beneficiario más allá del derecho común.

Huelga decir que esta diversidad de enfoques legislativos no es ajena, en su trasfondo, a la maduración eclesial de la concepción de la función de gobierno y del ejercicio de la potestad, que encuentra en el último concilio ecuménico un relevante punto de inflexión, y que queda plasmada jurídicamente en el CIC de 1983.

Tienen, sin embargo, en común ambas regulaciones la renuncia a determinar explícitamente la precisa naturaleza jurídica de las facultades habituales. Cada uno de los dos códigos procura dotarlas de un régimen jurídico cierto sin pronunciarse al respecto: el de 1917, mediante la mencionada asimilación *in iure* con un tipo de privilegio; y el de 1983 mediante el reenvío a las normas sobre la potestad delegada.

Cuando el legislador rehúsa dictar normas específicas sobre una figura jurídica (sea por economía normativa o por un sano sentido práctico, que opta por regular su uso y eficacia sin necesidad de esperar a la plena clarificación doctrinal de su naturaleza) y, al mismo tiempo, indica explícitamente las normas que se le habrán de aplicar, su elección del régimen jurídico aplicable se basa, obviamente, en ciertos elementos de esa figura que aparecen como comunes o similares con el supuesto regulado direc-

tamente por las normas elegidas. Al mismo tiempo, la misma técnica legislativa adoptada está indicando que no hay sólo puntos de coincidencia —se trataría entonces de figuras idénticas—, sino también diferencias.

Así, si la constatación de las semejanzas ofrece la base para establecer una regulación indirecta —probablemente suficiente a efectos prácticos—, la detección y el análisis de las diferencias constituirían el punto de partida para determinar la específica naturaleza jurídica de la figura así regulada y dotarla, en consecuencia, de un régimen más acorde con sus rasgos y función propios.

La construcción y el perfeccionamiento de los conceptos y de los *tipos* jurídicos, necesarios para el progreso de la ciencia jurídica y de la legislación, requiere una tarea doctrinal imprescindible de análisis y comprensión de las realidades (actos, instituciones, relaciones) presentes de modo eficaz en la experiencia jurídica. Y la tradición canónica al respecto ha sido especialmente brillante.

El autor se incorpora a esa tradición científica con la presente monografía. Un trabajo breve —gracias a su concisión y acierto en el enfoque— dividido en dos partes, que comprenden un total de cinco capítulos. La primera parte da cuenta del proceso de elaboración del c. 66 del CIC 17, basándose en las fuentes documentales del Archivo Secreto Vaticano, que se reproducen en los Apéndices con que se cierra el volumen. La segunda analiza la doctrina anterior y posterior al Código Pío-benedictino en torno a la naturaleza de las facultades habituales.

Además de ofrecer, aportando los documentos inéditos, la historia textual

del tratamiento jurídico de la figura en la primera codificación, la monografía presenta, en su segunda parte, un agudo y valioso trabajo de análisis jurídico de la doctrina y de la praxis canónica sobre estas facultades habituales. Son de especial interés, a mi juicio, los dos últimos capítulos, centrados en determinar, respectivamente, los rasgos configuradores de las facultades habituales y la significación y articulación jurídica de la habitualidad o estabilidad que es rasgo típico distintivo de esta clase de facultades.

El estudio se concluye apuntando algunas perspectivas para la construcción jurídica de la figura de las facultades habituales, que aparecen como un recurso técnico apto para perfeccionar la eficacia de los diversos oficios de gobierno eclesiástico, no alterando su configuración, sino adaptando de modo flexible y eficaz sus atribuciones a las necesidades y circunstancias, más o menos transitorias, en que han de desempeñarse.

La aparición de una monografía de estas características es siempre una buena noticia: da fe de la vitalidad de la ciencia canónica, y precisamente en una de las facetas más necesarias para su calidad científica y para su perfeccionamiento. En este caso, además, el rigor metodológico y la finura de percepción demostrada por el autor han producido un apreciable resultado. Su lectura, sugerente en todo caso, será de especial utilidad para todos los interesados en el estudio o en la práctica canónica de cuestiones relacionadas con la organización eclesiástica y el derecho administrativo canónico.

JORGE MIRAS